



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, primero de marzo de dos mil veintitrés

E22-131

REFERENCIA: APELACIÓN AUTO
EJECUTANTE: DIANA MARCELA MARÍN CIFUENTES en representación de su hijo menor SANTIAGO CASTRO MARÍN
EJECUTADO: PORVENIR
RADICADO: 05001-31-05-011-2019-00515-01
DECISIÓN: CONFIRMA y ADICIONA

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra el auto que resolvió las excepciones dentro del proceso ejecutivo conexo de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 06** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

- Mediante sentencia proferida el 04 de agosto de 2014 el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, **CONDENÓ** a **PORVENIR S.A.** a reconocer y pagar al menor **SANTIAGO CASTRO MARÍN**, representado por su madre **DIANA MARCELA MARÍN CIFUENTES**, el reajuste de la pensión de sobrevivientes del 50 al 100% del salario mínimo a partir del 31 de agosto de 2015 en cuantía de 1 SMLMV., reconociéndole un retroactivo de \$11'470.990 por concepto de reajuste pensionales causados desde el 9 de octubre de 2012, hasta el 31 de agosto de 2015, la suma de suma de \$42.617 por concepto de intereses moratorios sobre las mesadas reconocidas en la comunicación del 19 de febrero visible a fl 26-27 del expediente, la indexación sobre el reajuste ordenado y las costas del proceso, fijando como agencias en derecho la suma de \$1'473.356.

- La anterior decisión fue modificada por el Tribunal Superior de Medellín por sentencia del 30 de agosto de 2017, CONDENANDO a **PORVENIR S.A.** a reconocer y pagar a favor al menor **SANTIAGO CASTRO MARÍN** los intereses moratorios regulados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, los cuales deberá liquidar la demandada a partir del 10 de enero de 2013 sobre cada una de las mesadas que conformen el total del retroactivo que adeude al momento del pago efectivo de la obligación, atendiendo la fecha de causación de cada una de ellas y en su lugar absolvió de la indexación. Finalmente condenó en costas a Porvenir fijando las agencias en derecho en la suma de \$737.717.
- Mediante memorial del 26 de julio de 2019, la señora DIANA MARCELA MARÍN CIFUENTES en representación de su hijo, solicitó se librara mandamiento de pago por el saldo insoluto de las mesadas pensionales, el saldo insoluto de los intereses moratorios y las costas del proceso ejecutivo.
- Por auto del 23 de noviembre de 2020 el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín libró mandamiento de pago en contra de PORVENIR y a favor de DIANA MARCELA MARÍN CIFUENTES en representación de su hijo menor SANTIAGO CASTRO MARÍN por la suma de \$7.651.223 por concepto a la diferencia de intereses moratorios entre lo adeudado y lo pagado, \$12.840.611 por concepto de reajustes pensionales causados desde el 1º de septiembre de 2015 hasta el 30 de mayo de 2018, valor que se deberá pagar debidamente indexado desde octubre de 2015 hasta la fecha de pago y las costas del ejecutivo.
- En audiencia celebrado el 9 de diciembre de 2022 el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín resolvió las excepciones propuestas por la ejecutada, DECLARANDO NO PROBADA LA EXCEPCION DE PAGO y ordenando seguir la ejecución por la suma de \$7.651.223 por concepto a la diferencia de las sumas pagadas por intereses moratorios y \$12.840.611 como capital correspondiente a la diferencia existente entre la suma pagada por concepto del reajuste pensional y la liquidada por el despacho.
- La anterior decisión fue apelada por los apoderados de ambas partes.

2. ARGUMENTOS

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Argumentó que conforme los títulos judiciales que fueron consignados a órdenes del despacho por parte de PORVENIR por valor de \$11.400.000 por concepto de intereses moratorios, \$12.239.864 por reajuste a la mesada pensional y \$2.211.073 por costas del proceso ordinario, dineros que ya se pagaron a la parte ejecutante según se evidencia en la orden de pago que reposa a folio 210 del archivo 02 del expediente digital, al momento de librarse el mandamiento de pago se realizó un

cálculo de las sumas ordenadas en la sentencia y las pagadas por PORVENIR de lo que se concluyó que estas fueron deficitarias, sin que a la fecha Porvenir haya realizado consignación alguna a órdenes del despacho a favor de la ejecutante por los conceptos librados en el mandamiento de pago, por lo que declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución.

2.2. ARGUMENTOS DE INCONFORMIDAD

2.2.1. DEL EJECUTANTE

Manifestó que se debe ordenar continuar la ejecución por la indexación en la mora en el pago de estas mesadas, si bien en su momento no se libró mandamiento de pago por este concepto, ya es pacífica la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de establecer que la indexación obedece a un equilibrio económico de unas sumas de dinero que la reclamante debió haber recibido en el término legal pero que por la demora en el pago por parte del fondo de pensiones cuando reciba este dinero estará depreciado.

2.2.2. DE LA EJECUTADA

Señaló que se debe declarar probada la excepción de pago, ya que se cumplió con el 100% de las obligaciones que se generaron del proceso ordinario al cual es conexo este ejecutivo, de ello da cuenta la prueba documental aportada, por lo que se debe ordenar el archivo del proceso.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Vencido el término de traslado ninguna de las partes presentó alegatos.

3. CASO EN CONCRETO

El problema jurídico consiste en determinar si la decisión del a quo de declarar no probada la excepción de pago respecto al reajuste de mesadas pensionales y los intereses moratorios está ajustada a derecho o si por el contrario la entidad ya cumplió a cabalidad con lo ordenado en la

sentencia que dio origen al proceso ejecutivo. Dependiendo de ello se analizará si la orden de ejecución también debe seguirse por la indexación de las anteriores sumas.

Pues bien, según se verifica a folios 157 del archivo 02 del expediente digital mediante sentencia del 4 de agosto de 2014 el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín se dispuso:

PRIMERO CONDENAR a LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA. representada legalmente por el Doctor RICARDO ENRIQUE TORRES NIETO o por quien haga sus veces, a reconocer y pagar al menor de edad SANTIAGO CASTRO MARÍN quien es representado por su madre la señora DIANA MARCELA MARÍN CIFUENTES el 50% que se dejó en reserva completando así el 100% de la prestación, de conformidad con la parte motiva del presente providencio.

SEGUNDO: CONDENAR A PORVENIR SA. a pagar al menor de edad SANTIAGO CASTRO MARÍN quien es representado por su madre la señora DIANA MARCELA MARÍN CIFUENTES la suma **\$11'470.990,00** por concepto de reajustes pensionales causados desde el 9 de octubre de 2012 hasta 31 de agosto de 2015.

TERCERO: A partir del 1 de septiembre de 2015 al AFP demandada deberá continuar reconociendo y pagando a la parte actora la mesada pensional al 100% que para este año equivale a \$644.350,00 más la mesada adicional de diciembre, sin perjuicio de los incrementos legales para cada año, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: CONDENAR a PORVENIR SA. a pagar a la parte demandante la suma de **\$42.617,00** por concepto de intereses moratorios sobre las mesadas pensionales reconocidas en la comunicación del 19 de febrero de 2013 (fl. 26-27) del expediente.

QUINTO: CONDENAR a PORVENIR SA. al menor de edad SANTIAGO CASTRO MARÍN quien es representado por su madre la señora DIANA MARCELA MARÍN CIFUENTES el valor de la indexación sobre el reajuste ordenado en esta sentencia teniendo como IPC inicial del mes de noviembre de 2012, y como IPC final el del mes que se pague la obligación, aplicando la fórmula establecida en la parte motiva de este proveído.

SEXTO: Las COSTAS, están a cargo de la sociedad demandada dentro de las cuales se fija como agencias en derecho la suma **\$1'473.356,00**.

La anterior decisión fue modificada por el Tribunal Superior de Medellín en sentencia del 30 de agosto de 2017, según se lee en el acta visible a folio 171 del archivo 02 del expediente digital, donde se indicó:

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora **DIANA MARCELA MARÍN CIFUENTES** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.017.179.986, quien actúa en representación de su hijo menor de edad **SANTIAGO CASTRO MARÍN**, contra **PORVENIR S.A.**, conforme lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO: se **CONDENA** a **PORVENIR S.A.** a reconocer y pagar a favor al menor **SANTIAGO CASTRO MARÍN** los intereses moratorios regulados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993 en los términos aludidos, los cuales deberá liquidar la demandada a partir del 10 de enero de 2013 sobre cada una de las mesadas que conformen el total del retroactivo que adeude al momento del pago efectivo de la obligación, atendiendo la fecha de causación de cada una de ellas.

TERCERO: se **REVOCA** el numeral quinto de la parte resolutive de la providencia y en su lugar se absuelve a la entidad de la pretensión tendiente a la indexación de las condenas.

CUARTO: COSTAS en esta instancia a cargo de la entidad demandada por no haber tenido éxito en el recurso. Se fija como agencias en derecho la suma de \$737.717.

El a quo libró mandamiento en contra de PORVENIR a favor de DIANA MARCELA MARÍN CIFUENTES en representación de su hijo SANTIAGO CASTRO MARÍN en los siguientes términos:

- 1.- \$7'651.223,00 como capital, correspondiente a la diferencia existente de la suma pagada por la entidad ejecutada, por concepto de intereses de mora del Artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
- 2.- \$12'840.611,00 como capital, por concepto de reajustes pensionales causados desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 30 de mayo 2018, valor que se deberá pagar debidamente indexado teniendo como IPC inicial el mes de octubre de 2015 y como IPC final el mes que se pague la obligación.
- 3.- Las costas de esta ejecución.

PORVENIR en el recurso de apelación insiste que dicha obligación ya fue cancelada; sin embargo dentro del expediente, la única prueba del pago que fue allegada fue copia de depósito judicial que se realizó en el banco agrario a órdenes del despacho y a favor del afiliado WERNWER FELIPE CASTRO VERA, que es el causante de la pensión de sobrevivientes, según se verifica a folios 203, 204 y 205, por valor de \$2.211.073 por concepto de costas, \$12.239.864 por intereses moratorios y \$11.400.000 por reajuste de mesadas y que fueron entregados a la parte actora por auto del 2 de julio de 2019 (fl 209), es decir, los que ya el a quo tuvo en cuenta previo a librar el mandamiento de pago del 23 de noviembre de 2020, en el cual se concluyó que pese a estos pagos aún existían dineros pendientes por cancelar, ya que las cifras canceladas a la ejecutante habían sido deficitarias, por lo que decidió librar el mandamiento por la suma de \$7.651.223 como saldo insoluto de intereses moratorios, por la suma de \$12.840.611 por los reajustes pensionales causados desde el 1º de septiembre de 2015 y hasta el 30 de mayo de 2018, suma que debería ser indexada a la fecha de pago, más las costas del ejecutivo, sin que en su momento las partes hayan presentado inconformidad frente a lo decidido en el mandamiento, por lo que dicha providencia quedó en firme.

Por tanto, le asistió razón al a quo cuando indicó que al no haberse acreditado por parte de la entidad ejecutada que realizó nuevos pagos a la ejecutante después de haberse librado el mandamiento mediante los cuales se hubieran cancelado las cifras indicadas en el referido auto, es claro que aún no se han satisfecho las obligaciones allí contenidas.

En consecuencia, concluye la Sala que Porvenir no ha pagado las sumas por las cuales se libró el mandamiento de pago el 23 de noviembre de 2020 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, por tanto se CONFIRMARÁ la decisión del a quo de DECLARAR NO PROBADA LA EXCEPCIÓN DE PAGO y continuar con la ejecución.

Ahora, en cuanto a la inconformidad del apoderado del ejecutante, donde solicita que se adicione la orden de continuar la ejecución y se incluya la indexación en la mora en el pago de las mesadas, se tiene que a través del mandamiento de pago, en el numeral segundo el mismo se libró por:

2.- \$12'840.611,00 como capital, por concepto de reajustes pensionales causados desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 30 de mayo 2018, valor que se deberá pagar debidamente indexado teniendo como IPC inicial el mes de octubre de 2015 y como IPC final el mes que se pague la obligación.

Sin embargo, en el auto del 9 de diciembre de 2022 a través del cual se resolvieron excepciones, el juez en la parte resolutive decidió:

PRIMERO: ORDENAR SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN dentro del presente proceso especial ejecutivo conexo promovido por la señora DIANA MARCELA MARÍN CIFUENTES en representación de su hijo SANTIAGO CASTRO MARÍN, por la suma de \$7'651.223,00 correspondiente a la diferencia existente de las sumas pagadas por concepto de interés de mora y por la suma de \$12'840.611,00 como capital correspondiente a la diferencia existente entre la suma pagada por concepto del reajuste pensional y la liquidada por este despacho. .

De donde se colige, que el a quo al resolver las excepciones realizó una modificación al mandamiento de pago, donde había ordenado que se librara por el capital de \$12.840.611 por los reajustes pensionales, más la indexación de dicho valor. Resulta menester, para esclarecer el punto, arrimarse a la noción misma de excepción de fondo o sustancial. Y viene al caso entender que ella no puede apuntar a la discusión de la existencia misma del derecho sino a su vigencia, a su posible extinción por un hecho nuevo modificativo o extintivo.

El doctrinante Caravantes, ha definido las excepciones de fondo así:

“Las excepciones perentorias, palabra que deriva del verbo *perimere*, destruir, extinguir, son las que extinguen o excluyen la acción para siempre y acaban el pleito, aunque sin examinar si está bien o mal fundada la acción o como dice Febrero, se llaman excepciones perentorias todas aquellas que acaban con el derecho del actor y que cuando quiera que éste lo use, pueden oponerse”.¹

Por tanto, la oportunidad procesal para cuestionar los aspectos señalados del mandamiento de pago era el de ejecutoria de la providencia. El artículo 331 del CPC señala que los autos y sentencias quedan ejecutoriados tres días después de notificados cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.

Para el caso que nos ocupa, en la legislación laboral encontramos el numeral 8 del artículo 65 modificado por el artículo 29 de la ley 712 de 2001, el cual establece lo siguiente:

“ARTICULO 65. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. <Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:
(...)
8. El que decida sobre el mandamiento de pago.(...)”

¹ Pallares Eduardo. DICCIONARIO DEL DERECHO PROCESAL CIVIL. México, 1963. Ed. Porrúa. P. 317-318.

Conforme a las razones aquí expuestas, la Sala encuentra que el auto mediante el cual el juez de primera instancia libró mandamiento de pago no fue recurrido por las partes, quedando en firme. Y la vía de la decisión de las excepciones perentorias no resulta adecuada para realizar modificaciones tan sustanciales como las efectuadas por el Juez, y por lo que no era viable que el juez ordenara continuar la ejecución únicamente por los valores deficitarios de intereses y reajustes, pero excluyera la indexación que había sido ordenada en el mandamiento de pago.

Por tanto concluye la Sala que resulta viable ADICIONAR el auto objeto de apelación en el sentido que la orden de continuar la ejecución será por los valores indicados en el mandamiento de pago al no haberse declarado no probada la excepción de pago, es decir que la ejecución deberá seguir adelante, por la suma de \$7.651.223,00 correspondiente a la diferencia existente de las sumas pagadas por concepto de interés de mora y por la suma de \$12.840.611, como capital correspondiente a la diferencia existente entre la suma pagada por concepto del reajuste pensional, valor que se deberá pagar debidamente indexado teniendo como IPC inicial el mes de octubre de 2015 y como IPC final el mes que se pague la obligación.

En consecuencia el auto venido en apelación será CONFIRMADO PARCIALMENTE con la ADICIÓN a que se hizo referencia.

Costas en esta instancia a cargo de la entidad ejecutada por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$500.000.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL** administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE el auto proferido el 9 de diciembre de 2022 por parte del Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ejecutivo laboral instaurado por **DIANA MARCELA MARÍN CIFUENTES** en representación de su hijo menor **SANTIAGO CASTRO MARÍN** contra **PORVENIR**, de conformidad con la parte motiva.

SEGUNDO: ADICIONA el numeral primero del auto apelado en el sentido que la ejecución deberá seguir adelante, por la suma de \$7.651.223,00 correspondiente a la diferencia existente de las sumas pagadas por concepto de interés de mora y por la suma de \$12.840.611, como capital correspondiente a la diferencia existente entre la suma pagada por concepto del reajuste pensional,

valor que se deberá pagar debidamente indexado teniendo como IPC inicial el mes de octubre de 2015 y como IPC final el mes que se pague la obligación.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de la entidad ejecutada por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$500.000

Lo anterior se notifica por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por
ESTADOS No. 036 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.
Medellín 2 DE MARZO DE 2023

Secretario